**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL**

Magistrada Ponente: **ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN**

Pereira, Risaralda, trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de reposición formulado por el apoderado judicial de la parte demandante contra el auto proferido el 26 de octubre de 2022, por medio del cual se rechazó la solicitud de nulidad invocada por su apoderado judicial.

El demandante sustenta su recurso en que, al resolver sobre la solicitud de nulidad, la Sala omitió pronunciarse de fondo y de motivar las razones por las cuales no existe violación al debido proceso, cuando en la sentencia se pretermitió efectuar un pronunciamiento sobre cada una de las pretensiones principales y subsidiarias que se plantearon en la demanda, con lo cual se evidencia una transgresión al debido proceso constitucional en relación con la falla al principio de congruencia.

En ese entendido, solicita que se reponga el auto del 26 de octubre de 2022, y, en su lugar, se decrete la nulidad por transgresión al debido proceso. Subsidiariamente solicita que se conceda el recurso de apelación y se disponga la remisión al superior jerárquico funcional.

CONSIDERACIONES

Como bien se reseñó en el auto recurrido, con posterioridad a la presentación de recurso de casación y su correspondiente concesión por esta Corporación, la parte actora presentó ante la Corte Suprema de Justicia -aunque dirigida a este Tribunal-, solicitud tendiente a que se declarara nulo el fallo de segundo grado, invocando para ello la causal de nulidad constitucional establecida en el artículo 29 Superior.

Ahora, de acuerdo con lo establecido por el Código General del Proceso y a lo considerado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otros en la providencia AL3003-2002, las nulidades procesales deben responder a tres postulados, a saber: especificidad, protección y convalidación, de los cuales en este caso no existe duda respecto de los dos primeros, como quiera que, en cuanto a la especificidad se invocó una causal consagrada en el ordenamiento jurídico, como lo es la nulidad constitucional por transgresión al debido proceso; mientras que la

parte demandante está legitimada por ser la directamente perjudicada con las omisiones que alega, cumpliéndose así el segundo postulado -protección-.

Ahora, la convalidación como tercer elemento, corresponde a la posibilidad de saneamiento, expreso o tácito, por no ser alegado el vicio por la parte afectada en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, en la misma instancia en la que tuvo lugar, con el fin de que sea el mismo funcionario o funcionaria quien la decida.

Así, atendiendo las actuaciones procesales reseñadas, es procedente dar aplicación a lo dispuesto en el art. 135 del CGP, que en su tenor literal dispone: “(...) No podrá alegar la nulidad quien (...) después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla”, por lo que “(...) El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que (...) se proponga después de saneada (...)”. En concordancia con el art. 136 ibidem que indica: *La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. (...)*”.

De cara a lo anterior, si la parte actora echó de menos el pronunciamiento expreso sobre las pretensiones subsidiarias, durante el término de ejecutoria de la sentencia pudo haber solicitado la adición de la providencia o presentar el incidente de nulidad, no obstante, se abstuvo de manifestar esta inconformidad y, en su lugar, presentó el recurso extraordinario de casación, ultimo que, ha sido enfática la Sala de Casación Laboral, no es el escenario para debatir irregularidades procesales suscitadas en las instancias y que no fueron alegadas en su momento, en el entendido que una vez culminadas las actuaciones en sede ordinaria, quedan saneadas todas las eventualidades nulidades en las que se haya incurrido, cuando la parte pudiendo alegarla, no lo hizo.

Y es que precisamente el anterior argumento fue el fundamento de la decisión de no dar por probada la violación del debido proceso, toda vez que, contrario a lo alegado por el apoderado de la parte actora, en la providencia recurrida sí se explicaron las razones por las cuales no se configuró la nulidad invocada, esto es, se itera, que el debido proceso, en los casos en que una de las partes considere que no se ha resuelto sobre alguna de las pretensiones o excepciones que presentó, tiene dispuesto que dentro del término de ejecutoria de la sentencia, se haga la petición de adición de la misma por el apoderado encargado de representar los intereses de la parte que le otorgó el poder, salvo cuando se corrige la omisión de oficio, circunstancia esta última que aquí no ocurrió. De allí que, al no haber actuado el profesional del derecho en ese sentido, se entiende que convalida la omisión,

máxime en casos como el presente en el que frente a la sentencia se procedió a interponer recurso de casación.

Conforme a lo señalado, esta Corporación no repondrá su decisión y no efectuará más consideraciones sobre la violación al debido proceso alegada, como quiera que la misma ya fue decantada en líneas precedentes, debiéndose tener en cuenta, además que ante el escenario planteado procedía incluso el rechazo de plano de la solicitud, es decir, sin trámite alguno, en la medida que, al no haberse invocado la nulidad en el momento oportuno, inane resulta verificar si la misma eventualmente se configuró, puesto que, en todo caso, en este momento se encuentra saneada.

En consecuencia, no se repondrá la decisión, sin que haya lugar a dar trámite al recurso de apelación presentado de forma subsidiaria, en razón a que los autos dictados en segunda instancia no admiten dicho recurso, a pesar de que por su naturaleza sean apelables, en el entendido que los artículos 65 del CPT y SS y 321 del CGP, limitan la alzada a las providencias proferidas en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la **Sala de Decisión Laboral N° 1 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,**

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto proferido por esta sala de Decisión el 26 de octubre de 2022 dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor **LUÍS ALBERTO ARCILA PÉREZ** contra la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.

SEGUNDO: RECHAZAR el recurso de apelación propuesto.

Notifíquese y cúmplase,

La Magistrada ponente,

Con firma electrónica al final del documento

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN

La Magistrada y el Magistrado,

Con firma electrónica al final del documento

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA

Con firma electrónica al final del documento

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ

Firmado Por:

Ana Lucia Caicedo Calderon
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Julio Cesar Salazar Muñoz
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 002 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Olga Lucia Hoyos Sepulveda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bfcfbb6736ee3f3066c80da935d2b59e12d8da637d63f20f917921f09300691a**

Documento generado en 13/03/2023 11:34:58 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>